



La estafa verde: opresión, conflictos y resistencias

Boletín del WRM 268

Diciembre 2023

[Acceda al boletín en el sitio web](#)

SUBSCRÍBETE

Tabla de Contenidos

NUESTRA OPINIÓN. Resistir a la ilusión de una extracción “verde”	3
El Parque Industrial KIPI revela el lado destructivo de la transición “verde” de Indonesia.....	5
Expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono: más evidencias del fraude de la compensación.....	13
Sobre los proyectos de carbono en la Amazonia: ¿por qué hay contratos que duran una generación?.....	17
Nueva publicación: “Esquemas de certificación de ‘sostenibilidad’: 30 años de engaño y violencia”	21
Camerún: Mujeres decididas a recuperar sus tierras ocupadas por la palmícola Socapalm/Socfin.....	24
Chile: La resistencia al modelo forestal en el Wallmapu, territorio Mapuche.....	26
Antes, durante y porvenir de la victoria por la defensa de la vida en Panamá.....	30
RECOMENDADOS.....	35
Abusos sexuales sistemáticos en un proyecto de 'compensación' de emisiones de carbono en Kenia	
Declaración de solidaridad con la lucha decolonial del pueblo palestino	
Herramientas para luchar contra las falsas soluciones climáticas	
Atlas de los Pesticidas	

NUESTRA OPINIÓN

Resistir a la ilusión de una extracción “verde”

Después de casi 30 años de negociaciones climáticas en el seno de la ONU, el resultado ha sido el establecimiento de políticas y prácticas que facilitan la constante expansión de la economía basada en combustibles fósiles (así como de sus ganancias) al tiempo que permanecen ocultas sus implacables consecuencias negativas en los territorios donde se expande.

Después de casi 30 años de negociaciones climáticas en el seno de la ONU, el resultado ha sido el establecimiento de políticas y prácticas que facilitan la constante expansión de la economía basada en combustibles fósiles (así como de sus ganancias) al tiempo que permanecen ocultas sus implacables consecuencias negativas en los territorios donde se expande. En particular, la fantasía de la compensación de carbono como solución a la crisis climática está cada vez más presente entre los métodos de maquillaje verde de las empresas como estrategia para expandir sus negocios, a pesar de la creciente evidencia de su total fracaso a la hora de reducir las emisiones o la deforestación, como denunciaron recientemente varias organizaciones. Sin embargo, las estrategias adoptadas por las empresas no logran ocultar la esencia opresiva y colonialista de sus avances en el Sur Global. Precisamente por eso siguen encontrando gran resistencia cuando llegan a los territorios de comunidades y Pueblos Indígenas.

Este número del Boletín del WRM contiene artículos que pueden dividirse en dos partes. La primera expone cuatro iniciativas que se disfrazan de ‘verde’ o ‘socialmente beneficiosas’ y así asegurar que no haya obstáculos para llevar a cabo las actividades extractivas y productivas. Después de todo, éstas son el motor de la economía capitalista, que a su vez es la causa principal de los problemas que tales empresas ‘verdes’ dicen ayudar a resolver. La segunda parte destaca tres experiencias de resistencia de los territorios a ese asalto de las empresas.

El [primer artículo](#) destaca las contradicciones intrínsecas de la llamada “transición energética”, exponiendo cómo “la mayor zona industrial verde del mundo”, en Kalimantan, Indonesia, en realidad provocará un aumento de la extracción de carbón en la región. Al mismo tiempo, este proyecto multimillonario amenaza con apropiarse y destruir los medios de subsistencia y los espacios de vida interconectados de tierra y mar de los que dependen las comunidades de base. Estas comunidades están en la primera línea de resistencia a este parque industrial, en defensa de la vida.

Los dos artículos siguientes muestran las diferentes consecuencias de dos tipos de proyectos que pretenden compensar las emisiones de carbono y que dependen en gran medida del uso de territorios comunitarios. [Uno de los artículos](#) denuncia la tendencia a expandir las problemáticas plantaciones de árboles, sobre todo en el Sur Global, con el argumento de que los árboles “compensarán” la contaminación emitida en otros lugares. Esto incluye toda la gama de plantaciones forestales, desde las plantaciones de monocultivos a gran escala patrocinadas por la industria de la celulosa hasta aquellas plantaciones que tienen buena apariencia, promovidas por

fondos de inversión mediante contratos abusivos con pueblos indígenas. [El otro artículo](#) reflexiona sobre los contratos abusivos para el establecimiento de proyectos REDD (Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los Bosques) en la región amazónica brasileña, específicamente sobre cómo comprometen prácticas indígenas milenarias, así como las generaciones futuras de las comunidades.

El [cuarto artículo](#) presenta un panorama de la lógica perversa de los sistemas de certificación que a lo largo de los últimos 30 años han otorgado sellos de ‘sostenibilidad’ y ‘responsabilidad’ a empresas de diferentes industrias que causan destrucción, como las de celulosa y papel, aceite de palma y compensación de carbono, entre otras. Estos sellos a menudo ignoran por completo las violaciones causadas por las empresas y legitiman su presencia en territorios comunitarios.

Los otros dos artículos también denuncian el maquillaje verde de las plantaciones de monocultivos industriales a través de la certificación, pero el enfoque se centra en resaltar las experiencias de resistencia y organización de las comunidades.

En Camerún, las mujeres organizadas en la asociación Afrise [han decidido, valientemente, decir “¡Basta!”](#) a la empresa de plantaciones de palma aceitera Socapalm/Socfin, responsable de décadas de “sufrimiento, abusos, violaciones, robo, hambre, frustración y violaciones” de sus cuerpos, derechos y dignidad. Expresamos nuestra total solidaridad con estas mujeres que, apoyándose mutuamente, han declarado que no tolerarán la replantación de monocultivos de palma aceitera en sus territorios.

El [siguiente artículo](#) reflexiona, en una entrevista con Pablo Reyes Huenchumán, miembro de una comunidad Mapuche en Chile, sobre los impactos del violento modelo forestal impuesto al país, que se basa en monocultivos a gran escala. Pero también reflexiona sobre los logros y desafíos de los Indígenas Mapuche en la defensa de sus comunidades y sus vidas. Pablo explicó cómo los Mapuche han reclamado sus territorios durante más de 20 años, revelando que la auto-organización y la resistencia son elementos clave para los pueblos indígenas en la defensa de sus tierras y autonomía.

Por último, destacamos un [exitoso proceso de resistencia en Panamá](#), donde la gente se movilizó y obtuvo una victoria histórica contra una subsidiaria de la empresa minera canadiense First Quantum Minerals. Después de más de 25 años de resistir los impactos de la minería de oro y cobre y de enfrentar nuevas amenazas para las comunidades que viven en las zonas mineras y sus alrededores, las actividades mineras fueron canceladas. Tomando en consideración demandas ambientales, sociales y de soberanía formuladas por los manifestantes, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la licencia otorgada a la empresa, ordenando así el cierre de la que es la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Y, como siempre, volvemos a publicar un artículo de un Boletín anterior que consideramos aún relevante y oportuno. Ahora bien, en el contexto de la reciente conferencia de la ONU sobre el clima celebrada en Dubai, la [relectura del artículo Climatología / Ideología](#) nos ayuda a comprender que la tímida y más que tardía mención de los combustibles fósiles en el texto final

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

de la conferencia no representa ninguna forma de esperanza ya que la preponderancia de una visión extremadamente reduccionista del problema climático en este espacio permanece inalterada.

Es desde los territorios donde se organizan quienes defenderán la vida y donde se resistirá al sistema que depende de los combustibles fósiles. Unámonos a la lucha y digámosle a las empresas que solo buscan el lucro: ¡no pasarán!

El Parque Industrial KIPI revela el lado destructivo de la transición “verde” de Indonesia

El presidente Jokowi califica al Parque Industrial Kalimantan Indonesia (KIPI, por su sigla en inglés) como “la zona industrial verde más grande del mundo”. Pero en realidad KIPI no es nada de eso. Exigirá un uso masivo de combustibles fósiles así como el acaparamiento a gran escala de tierras y agua, al tiempo que para miles de personas de las comunidades costeras representará la amenaza de un desalojo forzoso. [Disponible en indonesio.](#)

Situado a lo largo de la costa de la regencia de Bulungan, en la parte sur de la provincia de Kalimantan del Norte, el Parque Industrial Kalimantan Indonesia (KIPI) fue proyectado por el Presidente indonesio Jokowi como “la zona industrial *verde* más grande del mundo” (1). Las obras de construcción se iniciaron oficialmente en diciembre de 2021.

El gobierno afirma que KIPI será eficiente y eficaz en el uso de recursos, en la promoción de productos y tecnologías como las baterías de vehículos eléctricos y paneles solares para la llamada economía ‘verde’ y ‘baja en carbono’, y con una huella de carbono drásticamente menor que la de los parques industriales ‘comunes’, porque KIPI se basará en energía ‘renovable’.

Los preparativos de KIPI comenzaron en 2015, cuando el gobierno provincial de Kalimantan del Norte propuso al gobierno central la creación de una Zona Económica Especial en la región, con un puerto internacional. El gobierno central lo hizo en 2016 y en 2017 declaró a KIPI Proyecto Nacional Estratégico.

La inversión total prevista se estima en 132.000 millones de dólares. Empresas chinas ya han invertido grandes cantidades de dinero en el proyecto (2), lo que ha permitido que las obras de construcción en curso se desarrollen a toda velocidad.

Descifrando a KIPI: Nada más que mentiras

Pero el Proyecto KIPI en realidad contradice las afirmaciones y propaganda ‘verdes’ del gobierno. En primer lugar, KIPI tiene que ver con un acaparamiento masivo de 9.866 hectáreas de tierras, tan solo en su fase inicial de implementación (3). Significa el desalojo de al menos cinco mil personas, habitantes de las comunidades Tanah Kuning y Mangkupadi, y esta última incluye a Kampung Baru, una pequeña aldea situada en el extremo sur del Proyecto. Además, para la infraestructura portuaria y las actividades off-shore relacionadas, KIPI implicará otro acaparamiento de 175.854 hectáreas, lo que representa una reducción de cinco veces el espacio vital de las comunidades en el mar. En términos generales, KIPI básicamente destruirá los diversos y dinámicos medios de vida y sustento de las comunidades fuertemente conectadas con la tierra y el mar, los manglares, los campos agrícolas y los bosques.

Además, las industrias planificadas hasta ahora (4) que se aduce son ‘eficientes’ en el uso de los recursos captarán, según la Evaluación de Impacto Ambiental, 39.450.560 m³ de agua al año, en

particular de los ríos Pindada y Mangkupadi. Esto equivale a 1,5 veces el consumo anual de agua de los 700.000 habitantes de la provincia de Kalimantan del Norte. A cambio de eso, y supuestamente después de un ‘tratamiento’, se descargarán 248.440 m³ de aguas residuales cada cuatro horas en los ríos locales y el mar, que son las arterias de la trama vital que hace a los medios de vida y sustento de las comunidades.

El consumo eléctrico de las industrias proyectadas hasta el momento se estima en 11.404 GWh anuales. Para dar una idea de esta cantidad, en su capacidad máxima, Tanjung Selor, la capital de Kalimantan del Norte, solo consume 14,3 MWh, ni siquiera el 1% de la demanda de energía de KIPI (5). La promesa de ‘energía renovable’ será en realidad una central eléctrica de 5 GW alimentada a carbón, cuya construcción está prevista en la Regencia de Bulungan. Si bien la central eléctrica a carbón puede estar en funcionamiento dentro de dos años, la energía supuestamente ‘renovable’ procedente de la energía hidroeléctrica necesita mucho más tiempo para generarse (ver más abajo en este artículo).

La demanda de carbón de KIPI equivale al nivel de producción autorizado para 37 de las mayores operaciones de extracción de carbón en Kalimantan del Norte. Es un ejemplo más de cómo el discurso de la ‘energía renovable’ de los emprendimientos ‘verdes’ a gran escala depende en gran medida de los combustibles fósiles. Además, el uso de energía a base de carbón también atiende a intereses creados en una región donde el carbón abunda.

La construcción de este parque industrial ‘verde’, que funcionará a base de carbón y demandará un mayor consumo de combustibles fósiles (6), no impidió que Indonesia recibiera 610 millones de dólares de préstamo de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés) y el Mecanismo para la Transición Energética del Banco Asiático de Desarrollo. Estos préstamos respaldan la supuesta política de Indonesia de dejar de construir nuevas centrales eléctricas alimentadas a carbón. Astutamente, el gobierno permite mediante Decreto Presidencial (n.º 112/2022) que se construyan más centrales eléctricas a carbón para abastecer zonas industriales como KIPI.

Un acaparamiento de tierras plagado de conflictos de intereses, ilegalidades, irregularidades y criminalización

Las elites empresariales y los funcionarios gubernamentales aparentemente se organizaron y asociaron no sólo para apropiarse de la tierra que necesita KIPI sino, especialmente, para beneficiarse económicamente cuanto les sea posible del proyecto. Sin duda es necesario y urge realizar una investigación mucho más profunda acerca de las ilegalidades e irregularidades, en especial en relación a los fuertes indicios de corrupción.

Un primer grupo importante de irregularidades tiene que ver con el proceso de revisión de la planificación espacial de la Regencia de Bulungan. Comenzó cuando el gobierno provincial aportó dinero al gobierno de la Regencia de Bulungan para hacer un análisis de su documento y política de planificación territorial. Esto se hizo rápidamente en medio de la pandemia de Covid19 y desechando la realización de un debate público. Se creó una nueva ordenación espacial, 2021-

2040, que proyecta una superficie industrial de 16.400 hectáreas para dar cabida a KIPI. Se prevé otra revisión para garantizar el anuncio del presidente Jokowi cuando lanzó KIPI en 2021: que KIPI podría llegar a tener hasta 30.000 hectáreas. En 2021, KIPI ya había sido declarado ‘Proyecto Estratégico Nacional’, lo que significa una ‘licencia’ para practicar ilegalidades, irregularidades y violencia contra las personas y la naturaleza, como los desalojos forzosos, conjuntamente con la muy cuestionada Ley Ómnibus. (7)

Una persona clave entre las élites empresariales indonesias involucradas en KIPI es Garibaldi Thohir, a quien informalmente llaman Boy. El presidente Jokowi nombró a Boy como presidente del consorcio de tres empresas que gestionan las obras de construcción de KIPI: PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (PT KIPI), PT Indonesia Strategic Industry (8) y PT Kayan Patria Propertindo (9). Boy es el hermano mayor de Erwin Thohir, ministro de las Empresas de Propiedad Estatal del gobierno de Jokowi. Además, Boy es también uno de los propietarios de PT Adaro Minerals Indonesia, la empresa que gestionará PT KIPI y tiene participación en una de las industrias clave de KIPI: la empresa de fundición de aluminio llamada PT Kalimantan Aluminium Industry. Además de todo eso, Boy tiene muchas más vinculaciones. (10)

A través de la empresa malasia TSH Logistics, Boy es también uno de los propietarios de la empresa de palma aceitera PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP), que posee una concesión de más de 9.500 hectáreas en la Regencia de Bulungan, la cual se superpone cien por ciento con la superficie donde está previsto llevar a cabo el proyecto KIPI. En base a los documentos enseñados a JATAM y WRM, integrantes de las comunidades acusan a PT KIPI y PT BCAP no sólo de definir unilateralmente el precio de la tierra sino también de ofrecerle a la gente la compra de sus tierras utilizando la categoría de concesión para plantaciones de palma aceitera, llamada HGU - *Hak Guna Usaha*. La categoría que debería aplicarse a los terrenos utilizados para una zona industrial es la categoría de concesión HGB - *Hak Guna Bangunan*, para la cual se aplican precios mucho más altos.

Los aldeanos advierten que una vez que Boy y otras élites empresariales y estatales se hayan apropiado de la tierra, cambiarán la categoría de HGU a HGB y luego venderán la tierra por un precio mucho más alto al consorcio KIPI. Además, los aldeanos también revelaron a JATAM y WRM cómo las empresas aumentan ilegalmente el tamaño de las tierras. Frente a todo esto, la actitud de las autoridades locales es de total connivencia. (11)

Las comunidades se resisten: “Lo que respiramos ya no es el olor a pescado secándose sino el olor a polvo de los grandes vehículos”

Samsu, un líder comunitario de la aldea de Kampung Baru, se niega a que midan la tierra. Para él, ahí es donde comienza el acaparamiento de tierras y, por tanto, el desalojo. Rechaza el plan de ‘reubicación’ ofrecido por las empresas: “(...) ¿A dónde nos trasladarán? ¿Vale la pena el terreno y la ubicación del lugar en comparación con Kampung Baru, que ocupamos anteriormente?”, pregunta. Desde 2021, cuando se convirtió en portavoz contra el desalojo de Kampung Baru, sufre la criminalización de su protesta y ha sido denunciado tres veces ante diferentes departamentos de policía.

El Sr. Aris, otro aldeano, fue denunciado a la policía y arrestado cuando el 16 de diciembre de 2022 filmó con su teléfono móvil cómo PT KIPI invadía su tierra con vehículos pesados y excavadoras. Su hijo Imran señala: “Tenemos derechos sobre la tierra” y PT KIPI “quiere sembrar miedo en las comunidades”. Añadió que su padre fue tratado como un criminal terrorista solo por defender el territorio de la comunidad.

Se utilizan muchas otras tácticas para coaccionar y dividir a las comunidades, tales como la manipulación de las cartas de adquisición de tierras; obligar a los residentes a firmar actas sin información clara; reclutar a gente con influencia en la comunidad para que persuadan al resto a renunciar a sus tierras y ayudar con las mediciones; utilizar el término ‘compensación’ para anestesiarse a los aldeanos y así lograr que acepten renunciar a sus tierras, etc.

Como si esto fuera poco, el gobierno ha suspendido nuevas inversiones en la escuela primaria de Kampung Baru. Los aldeanos anuncian que si llegan nuevos alumnos a la escuela, tendrán que llevar sus propias sillas. En la práctica, el gobierno ya está borrando del mapa a Kampung Baru.

Incluso si el precio de la tierra fuera más elevado, el Proyecto KIPI solo está dispuesto a pagar por las pequeñas áreas donde la gente tiene sus casas. Lo que equivale a decir que si la gente vende, también estará ‘vendiendo’ el mar, los manglares, los ríos, los campos agrícolas, los bosques, la historia, la memoria y todo lo que forma parte de su territorio, cultura e identidad, que también atrae a numerosos turistas, una trama de vida vulnerable y delicada, con múltiples procesos interrelacionados, de la que depende el sustento de las poblaciones de Tanah Kuning, Mangkupati, así como de Kampung Baru.

Actualmente los aldeanos ya enfrentan restricciones e impactos debido a las obras de construcción de KIPI y están seriamente preocupados por su futuro. La comunidad de Tanjung, por ejemplo, ya debe hacer frente a graves problemas para satisfacer sus necesidades de agua. Tienen que comprarla durante los períodos de sequía, que son más prolongados y pueden durar meses. Temen que su situación empeore con la creciente contaminación del aire y el agua que conlleva el proyecto KIPI.

Las fronteras sociales y ecológicas del territorio de los pueblos de Tanah Kuning y de Mangkupati incluyen tanto la tierra como el mar, un territorio de vida interconectado. Aunque la mayoría son pescadores, también dependen en gran medida de los bosques para mantener sus pesquerías en el mar. La madera es esencial para construir sus barcos así como los ‘bagans’, pequeñas estructuras de madera construidas en el mar frente a la costa, que suman alrededor de 200.

Kesi, una trabajadora de la pesca de Kampung Baru, está preocupada por el futuro: “Si nos desalojan, ¿a dónde iremos a vivir? Queremos quedarnos aquí, quedarnos en nuestro pueblo. Además, a mi marido también le prohíben entrar al bosque para recolectar madera, así que automáticamente también se nos prohíbe construir bagans, porque requieren madera pesada. Si no hay pescadores ni bagans, ¿cómo vamos a trabajar? El trabajo que yo hago, que es salar el pescado, sólo puedo hacerlo cuando mi marido regresa del bagan”.

Las mujeres cortan y procesan el pescado de mar, convirtiéndolo en pescado salado. Wiwi, una pescadora de Kampung Baru, dice: “Ahora ya no hay más olor a pescado salado ni a anchoas. En el pasado, cuando caminábamos desde Kampung Baru a Pindada [otra comunidad de la zona], el paisaje era verde. Ahora todo fue desalojado por las industrias, lo que respiramos ya no es el olor a pescado seco sino el olor a polvo de los grandes vehículos”.

Aunque la vida de las mujeres depende en gran medida de la pesca y ellas desempeñan un papel fundamental en la economía local, fueron excluidas de las denominadas consultas a las comunidades sobre la instalación de KIPI, lo que muestra cómo el ‘capitalismo verde’ necesita del patriarcado para existir.

El transporte de carbón por el mar se ha intensificado desde aproximadamente 2015, invadiendo sus zonas de pesca. Con todo el consumo de carbón previsto para KIPI, los impactos serán más severos. Erni es un pescador de Tanah Kuning que trabaja con otros cuatro pescadores: “Ya hay consecuencias para los pescadores, nuestros ingresos son menores. Quizás porque el carbón cae al mar, hay menos peces” (.) “(. .), algunos [pescadores] han ido [a trabajar] a la empresa”. Esto último muestra otra táctica que los promotores de KIPI utilizan para romper la resistencia de la gente: emplear a los aldeanos, en condiciones laborales opresivas.

La extracción de carbón en Kalimantan del Sur motivó a Amiruddin hace varios años a mudarse a Tanah Kuning y convertirse allí en constructor naval. Lo hizo porque la madera dura de meranti y meranti rojo, utilizada para construir embarcaciones, se había vuelto escasa en Kalimantan del Sur, debido a la invasión de la minería del carbón en el bosque. Pronostica que junto con el avance de KIPI también escaseará la madera en Tanah Kuning y los bosques circundantes: “Sí, calculo que en tres años disminuirá. Incluso ahora, ya está disminuyendo”. El negocio de Amiruddin está decayendo porque el precio de la madera de meranti aumentó considerablemente. Cuando la contaminación del mar afecte cada vez más a las pesquerías, serán menos y menos los pescadores que se hagan a la mar.

REDD, represas hidroeléctricas y caos climático: el papel de las ONG conservacionistas

No sólo las elites empresariales apoyan a KIPI, también grandes empresas conservacionistas como WWF y la filial indonesia de The Nature Conservancy (TNC): Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

De hecho, estas ONG deberían considerarse empresas, ya que sus intereses están estrechamente vinculados a los del capital financiero (12). A su vez, los intereses del capital financiero están estrechamente vinculados a las industrias extractivas a través de proyectos como KIPI. Las empresas conservacionistas, al igual que las industrias extractivas y los gobiernos, apoyan REDD+, que es un mecanismo de compensación que permite a las industrias extractivas continuar con sus actividades habituales y aumentar sus ganancias. (13)

Las empresas conservacionistas también ayudaron a crear el llamado Plan 30X30, discutido en negociaciones internacionales: es un plan que tiene como objetivo “proteger” el 30% de la superficie mundial para 2030. Este plan, sin embargo, se basa en ideas de “conservación fortaleza”, que excluye y margina a quienes han custodiado y convivido con esos territorios durante generaciones. El interés radica en acceder y apoderarse de enormes cantidades de tierra para compensar el carbono y la biodiversidad, entre otras cosas.

Dado que Kalimantan del Norte tiene más de un 80% de cubierta forestal, WWF y TNC/YKAN se involucraron. El gobierno provincial expresó interés en implementar un programa REDD jurisdiccional ya que participa en el llamado Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y los Bosques, más conocido como GCF por su sigla en inglés. (14) TNC/YKAN y el gobierno provincial firmaron un acuerdo en 2021. Según la Directora Ejecutiva de TNC/YKAN, Herlina Hartanto: “Nos sentimos honrados por la confianza del gobierno provincial para trabajar juntos en la realización de la gran visión de Kalimantan del Norte, donde el desarrollo va de la mano con la conservación de la naturaleza”. (15)

TNC/YKAN ve que KIPI va de la mano con las represas hidroeléctricas, conocidas como PLTA en Indonesia, a las que consideran ‘energía renovable’ y parte esencial de ese desarrollo ‘verde’. WWF y TNC/YKAN apoyan (16) la construcción de PLTA Kayan, una central hidroeléctrica de 9.000 MW que estará finalizada en 2030, y PLTA Mentarang, con una capacidad total de 1.375 MW.

PLTA Kayan afectará una superficie de 184.270 hectáreas y dejará bajo agua a seis comunidades, incluidos sitios antiguos y tumbas sagradas. Además de KIPI, PLTA Kayan y PLTA Mentarang abastecerán de electricidad también a IKN, la nueva capital de Indonesia, donde se está llevando a cabo la destrucción y el proceso de desalojo del pueblo Balik. (17)

La construcción de estos proyectos de infraestructura de represas hidroeléctricas no solamente supondrán destrucción y deforestación a nivel local sino que también son altamente destructivos para el clima. Philip Fearnside, un científico que estudia los impactos de las represas hidroeléctricas en la Amazonía brasileña, explica (18) que estas represas “emiten dióxido de carbono y también metano, y estas emisiones son mucho mayores en los primeros años después de que se llena un embalse, lo que las hace especialmente perjudiciales para el calentamiento global”.

Consideraciones finales

El presidente Jokowi destaca a KIPI como un ejemplo para el mundo: “Éste es el futuro de Indonesia. El futuro de Indonesia está aquí. Si podemos desarrollarlo adecuadamente, cualquier industria relacionada con productos ecológicos definitivamente mirará hacia esta área”. (19)

Pero el verdadero ejemplo que puede mostrarse hasta ahora sobre KIPI es la dura realidad que enfrentan en el terreno las mujeres y hombres de Tanah Kuning, Mangkupati y Kampung Baru, que resisten y defienden sus cuerpos, vidas y espacios de vida. Experimentan la destrucción, la

deforestación, la intimidación y la violencia que se esconden detrás de la imagen de los coches eléctricos y otros ‘productos verdes’.

La experiencia de KIPI también revela que la creación de áreas protegidas y la restricción del acceso a las personas que dependen de los bosques es otro aspecto clave de la mentira ‘verde’, como si ellos –y no las industrias-, fueran los responsables de la deforestación. Por un lado envía un mensaje a los inversores de que los bosques de Kalimantan del Norte estarán protegidos, y por el otro oculta la destrucción en curso que se lleva a cabo en Tanah Kuning, Mangkupadi y Kampung Baru. Sus territorios y bosques serán invadidos y destruidos para la construcción de represas hidroeléctricas; para extraer los 7 millones de toneladas de piedra caliza necesarias para KIPI; para llevar a cabo proyectos de compensación; y para todo lo que KIPI requiere, entre otras cosas petróleo, carbón, electricidad, agua, minerales relacionados con las baterías, mineral de hierro, bauxita, etc.

KIPI deja en evidencia que, en esencia, el objetivo del ‘desarrollo verde’ es crear simplemente otra gran oportunidad para que las oligarquías así como los intereses del poder político y empresarial obtengan ganancias. El mensaje urgente que nos transmiten las comunidades de Tanah Kuning, Mangkupadi y Kampung Baru es que es necesario detener de inmediato el proyecto KIPI.

JATAM East Kalimantan y WRM

Este artículo se basa principalmente en el informe ‘Green Lie: portrait of the Threat of Destruction, Oligarchy and People's well-being on the Site of the Green Industrial Estate Project in North Kalimantan’ ‘Kebohongan Hijau: Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat Pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara’, publicado en septiembre de 2023 y producido por Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) East Kalimantan y NUGAL Institute for Social and Ecological Studies, así como por información obtenida durante una visita conjunta a las comunidades de la zona en octubre de 2023.

(1) [Kalimantan Industrial Park Can Be World's Largest Green Industrial Area, President Jokowi Says](#), February 2023.

(2) CELIOS, [Green Industrial Area Infected by Coal Power Plant: Economic Impacts, Conflicts of Interest, and Environmental Threats](#), 2023.

(3) Las obras de construcción ya en marcha fueron autorizadas en 2021 por el gobierno provincial luego de la realización de un informe de impacto ambiental (AMDAL). Con un anexo incluido en 2022, AMDAL define un área total de 9.866 hectáreas, que incluye a Tanah Kuning, Mangkupadi y Kampung Baru, que se desarrollarán en la primera fase de implementación del Proyecto.

(4) Según AMDAL, una industria petroquímica, una fundición de aluminio para transformar bauxita en óxido de aluminio y otros subproductos para aviones y automóviles así como mineral de cobre y níquel para baterías de vehículos eléctricos, una industria siderúrgica para abastecer la producción de vehículos eléctricos, armamento e infraestructura y una industria policristalina para producir paneles solares.

(5) Konrankaltara, [PLN Tanjung Selor Surplus Daya 5,7MW](#)

(6) Además de su electricidad procedente de combustibles fósiles, KIPI consumirá y quemará aún muchos más combustibles fósiles: la industria petroquímica prevé una demanda anual de 490 millones de toneladas de diferentes tipos de petróleo fósil y 9,9 millones de toneladas de carbón. La industria siderúrgica también

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

demandará carbón, 14,9 millones de toneladas al año.

(7) El Art. 121 de la Ley Ómnibus (Ley de Creación de Empleo), relativa a las modificaciones al artículo 10 de la Ley Número 12 de 2012 sobre Adquisición de Tierras para el Desarrollo cuyo alcance es el desarrollo para el interés público, se amplía con la incorporación de parques industriales, zonas económicas especiales, turismo, áreas industriales de petróleo y gas, entre otros. Con estas incorporaciones, las obras de PSN se intensificarán, especialmente los proyectos basados en áreas o parques industriales, por ejemplo parques industriales verdes. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>:

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

(8) PT ISI es una empresa activa en el sector energético y responsable del suministro energético de KIPI. Su propietario, Tjandra Limanjaya, a través del Proyecto Celukan Bawang PLTU ha estado involucrado en un caso de falsificación y lavado de dinero. Limanjaya está relacionado con políticos y es propietario de PT Kayan Hydro Energi (KHE), que es la empresa que construirá la represa hidroeléctrica.

(9) PT KPP, a través de una empresa afiliada conectada con el mayor oligarca político y empresarial local de Kalimantan del Norte, Lauw Juanda Lesmana, participa, entre otras cosas, en la minería del carbón. Tiene una participación en PT Kayan Hydropower Nusantara, junto con la empresa malaya Sarawak Energy. PT KHN tiene un proyecto de represa en el río Mentawa, es una empresa que compete con el otro proyecto de represa hidroeléctrica en el río Kayan para suministrar energía a KIPI.

(10) Otros tres empresarios, Wito Krisnahadi, Christian Ariano Rachmat y Djoko Pangarso Budi Santoso, están indirectamente relacionados con Boy por ser comisario y director tanto de KIPI como de PT Adaro. Uno de los propietarios de PT Adaro es Cita Mineral Investindo, una empresa de bauxita propiedad de la vigésima persona más rica de Indonesia y responsable de destruir medios de vida y sustento en Obi, en el norte de las Molucas, y Wawoni, en el sudeste de Sulawesi.

(11) Por el contrario, el gobierno local redujo el llamado Valor de Venta del Objeto (NJOP) de la tierra. Mientras que en 2020 el NJOP en la zona de KIPI seguía siendo de 56.000 rupias por metro cuadrado, esta cantidad de repente cayó drásticamente a 6.000 rupias por metro cuadrado en 2022.

(12) African Arguments, [Revealed: Big conservation NGOs are majority governed by finance figures](#), August 2023.

(13) WRM, [15 Years of REDD: A Mechanism Rotten at the Core](#), 2022.

(14) [Penilaian kesiapan pelaksanaan pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan \(REDD+\) di provinsi Kalimantan Utara](#), Effendi, Wiwi et al, 2022.

(15) <https://www.ykan.or.id/id/publikasi/artikel/siaran-pers/kaltara-menuju-pembangunan-hijau/>

(16) [Berbagai Cerita dari Lapangan. Masyarakat Lokal dan Energi Terbarukan](#).

(17) JATAM Kaltim, Bersihkan Indonesia, PuSHPA, AMAN Kaltim. Nyapu: bagaimana perumpuan dan laki-laki Suku Balik mengalami kehilangan, derita dan kerusakan berlapis akibat megaprojek Ibu Kota Baru Indonesia, 2023.

(18) Instituto Humanitas Unisinos, [Como salvar a floresta amazônica?](#) Entrevista com Philip M. Fearnside, Agosto 2023.

(19) Id. (1)

Expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono: más evidencias del fraude de la compensación

En los últimos dos años, las iniciativas de plantación de árboles destinadas a los mercados de carbono se han duplicado. Pero ya sea como grandes monocultivos o como proyectos de supuesto beneficio para comunidades de base, las plantaciones de árboles destinadas a la compensación de emisiones de carbono no son una solución al caos climático ni benefician a las comunidades rurales del sur global.

Las destructivas industrias extractivas se aprovechan de la preocupación pública por el caos climático para promover engañosos proyectos de plantaciones de árboles como solución a sus crecientes emisiones de combustibles fósiles. Las empresas de plantaciones esperan con ello conseguir nuevas fuentes de ingresos, mientras que las industrias que dependen de los combustibles fósiles buscan una coartada para continuar con su contaminación. El resultado es el intenso crecimiento de los proyectos de plantaciones de árboles para compensar las emisiones de carbono así como un aumento constante de la demanda de créditos de carbono.

Varias organizaciones ya advirtieron hace 23 años (1) que la capacidad de los árboles de absorber y almacenar carbono ha sido empleada de manera muy mal intencionada para potenciar el maquillaje verde de las plantaciones de árboles, la cual encierra la mentira de que plantar más árboles puede compensar el daño climático causado por las emisiones de carbono fósil. Lo que no aparece en los anuncios de “bosques plantados” de las empresas es la devastación que causan sus plantaciones.

Las plantaciones industriales para la producción de madera han ocupado más de 130 millones de hectáreas del planeta a costa del desalojo de comunidades, acaparamiento de tierras y agua, aumento de la opresión sobre las mujeres, deforestación, pérdida de biodiversidad y, a menudo, incendios devastadores que no sólo liberan nuevamente todo el carbono a la atmósfera sino que también causan muertes y destruyen medios de vida y sustento. Para ocultar la violencia intrínseca de este modelo de producción, las empresas siguen difundiendo la mentira del maquillaje verde. (2)

Este rastro de destrucción y conflictos comunitarios no ha impedido que empresas, inversores y gobiernos presenten las plantaciones destinadas a la compensación de emisiones de carbono como una solución a la crisis climática.

En los últimos dos años, las iniciativas de plantación de árboles con destino a los mercados de carbono se han duplicado tanto en términos de cantidad de proyectos como de su tamaño promedio. Teniendo en cuenta los cuatro principales registros voluntarios de carbono del mundo (3), el número de solicitudes y proyectos aumentó de 167 a 367 desde enero de 2021 a mayo de

2023, con un promedio estimado de una reducción anual de emisiones de 135.000 a 213.000 toneladas de dióxido de carbono por proyecto. Casi el 90% de los proyectos se llevan a cabo en el Sur Global.

Algunas de las mayores empresas de plantaciones forestales se encuentran entre los beneficiarios. La gigante de celulosa y papel Suzano en Brasil sostiene que su proyecto de plantación de eucaliptos en 38.000 hectáreas en el estado de Mato Grosso do Sul no habría sido posible sin el aporte adicional proveniente de los créditos de carbono –una mentira descarada dado que la empresa ha estado expandiendo agresivamente sus plantaciones para alimentar su nueva planta de celulosa en construcción.

No solamente los proyectos de monocultivos de árboles son un problema. Las empresas que se especializan en sacar provecho del interés de las industrias contaminantes en las compensaciones de carbono están alistando a pequeños agricultores y comunidades indígenas para la plantación de árboles. En varios de estos programas destinados a pequeños agricultores, éstos no están advertidos sobre en qué se están metiendo ni de que sus nombres y tierras serán utilizados por lejanas empresas para obtener ganancias adicionales y afirmar ser ‘carbono neutrales’. A través del fondo Livelihoods Fund, con sede en París, por ejemplo, empresas como Danone, Michelin, Hermès, SAP, Mars, Chanel, y bancos de desarrollo como el alemán KfW (a través de su subsidiaria DEG Invest) y otros invierten en plantaciones forestales en Andhra Pradesh, India, donde los agricultores dicen no tener conocimiento de los créditos de carbono, a pesar de que su tierra y su trabajo han generado créditos de carbono que solo benefician a las industrias contaminantes. (4)

Las compañías petroleras también han estado involucradas en el acaparamiento de tierras para expandir las plantaciones de árboles con destino a la compensación de sus emisiones de carbono. En la República del Congo, las comunidades no tienen dónde cultivar sus alimentos porque el gigante petrolero Total se apodera de la tierra para establecer plantaciones de árboles. Su argumento es que puede seguir lucrando con la extracción de petróleo y gas porque gracias a la compensación de carbono de sus plantaciones no estaría dañando el clima. (5)

A escala nacional, numerosos gobiernos y legisladores han hecho su parte para promover las plantaciones de árboles destinadas a compensar las emisiones de carbono. Por ejemplo:

- En Nueva Zelanda, como aspecto central del plan del gobierno para la reducción de emisiones, el plan estatal de comercio de emisiones recompensa a los propietarios de tierras que invierten en monocultivos de pinos, lo que ha impulsado un fuerte aumento de dichos monocultivos; esto ha provocado la disolución de comunidades y ha causado enormes pérdidas sociales y culturales. (6)
- En Paraguay, el proyecto Proeza dirige la política institucional del Estado en materia forestal y se basa en la expansión de las plantaciones de eucalipto para cumplir con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país. (7) Los proyectos son financiados por el Fondo Verde para el Clima y se han llevado a cabo a través del Fondo Arbaro,

cuyas plantaciones han sido denunciadas por abusos y perjuicios a las comunidades en países sudamericanos y africanos donde opera. (8)

- En India, el parlamento aprobó recientemente el Proyecto de ley (enmienda) de conservación forestal, que reduce las restricciones al establecimiento de plantaciones de árboles en ciertos tipos de tierra, lo que podría desencadenar una expansión considerable de este tipo de proyectos con el pretexto de ayudar al país a alcanzar su meta de cero emisiones netas para 2070.

A escala internacional, los grupos de presión de las empresas, las organizaciones intergubernamentales y las grandes ONG conservacionistas presionan a los Estados para que avancen aún más en la legitimación de los mecanismos de compensación, entre ellos las plantaciones de monocultivos de árboles. Eso es lo que resalta en todos los intentos dentro de la ONU para integrar la compensación de carbono en el Acuerdo de París; en el número de acuerdos (9) firmados entre desarrolladores de grandes proyectos y gobiernos nacionales antes de la COP 28 de la ONU sobre el Clima para aumentar los grandes proyectos de carbono de millones de hectáreas; en el hecho de que las empresas siguen de cerca los resultados de la cumbre del clima de la ONU en términos de las consecuencias de sus decisiones en el mercado (10); y en eventos como la Cumbre Africana sobre el Clima destinada a “impulsar el crecimiento verde y las soluciones de financiación de la acción climática”, en los que las plantaciones de árboles y las compensaciones de carbono recibieron especial atención.

Mientras tanto, la raíz del problema permanece intacta. Se espera que la extracción mundial de petróleo, gas e incluso carbón alcance niveles récord para fines de 2023, al igual que las emisiones de gases de efecto invernadero. (11) Por más grande que pueda ser, ninguna plantación de árboles ni ninguna otra “solución basada en la naturaleza” podrá absorber el carbono transferido continuamente desde el subsuelo a la atmósfera.

Ya sea como grandes monocultivos o como proyectos de agradable apariencia para con las comunidades de base, las plantaciones de árboles con destino a la compensación de emisiones de carbono nunca serán una solución al caos climático y nunca resolverán los problemas de las comunidades que dependen de la tierra y de los bosques en el sur global. Por el contrario, la expansión de estas plantaciones es una prueba más del fraude de la compensación de carbono, que permite a la industria que depende de los combustibles fósiles seguir funcionando como de costumbre y profundizar las relaciones coloniales, capitalistas, patriarcales y racistas que oprimen a las comunidades. Por todas estas razones, ¡hay que enfrentar y detener las plantaciones de árboles con destino a la compensación de emisiones de carbono!

Secretariado Internacional del WRM

(1) [Declaración de Mount Tamalpais](#), 2000.

(2) Ver aquí [las mentiras más comunes frecuentemente utilizadas por las empresas de plantación](#) o aquí, [qué hay de malo en plantar árboles](#).

(3) Verra-VCS, Gold Standard, Climate Action Reserve (CAR) and American Carbon Registry (ACR)

(4) See more in the report [“Discredited: the voluntary carbon market in India”](#).

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

- (5) [“La compensation carbone au détriment des populations”](#).
- (6) [New Zealand falls out of love with sheep farming as lucrative pine forests spread](#).
- (7) [“La totalidad del diablo: la lucha de Paraguay contra los agronegocios y los monocultivos de árboles”](#).
- (8) [Arbaro Fund: una estrategia para expandir las plantaciones industriales de árboles en el Sur Global](#).
- (9) [Por ejemplo el acuerdo firmado entre Emiratos Árabes Unidos y Zimbabwe](#).
- (10) Un ejemplo fue la conferencia mundial sobre los mercados de carbono [“Global Carbon Markets Conference”](#), celebrada en noviembre de 2023.
- (11) [Petróleo. Gas. Carbón](#).

Sobre los proyectos de carbono en la Amazonia: ¿por qué hay contratos que duran una generación?

Los proyectos de compensación de carbono amenazan los huertos, la tala de árboles para la subsistencia y otras prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas y las comunidades tradicionales de la Amazonia. Los contratos que promueven las empresas socavan las estrategias locales de cuidado y creatividad de los trabajadores y trabajadoras, al subestimarlas o incluso negarlas por completo.

*“Compositor de destinos
tambor de todos los ritmos
tiempo, tiempo, tiempo, tiempo
entro en un acuerdo contigo
tiempo, tiempo, tiempo, tiempo...”*

Oração ao tempo [Oración al tiempo] - Caetano Veloso, compositor e intérprete de música popular brasileña, gran activista durante la dictadura militar que tuvo lugar en Brasil de 1964 a 1985.

En los días más calurosos de la historia de la humanidad, la Amazonía se vio afectada, en 2023, por una de las sequías más graves de su historia. Los pueblos a los que solo se puede acceder en barco quedaron aislados, con imágenes apocalípticas de embarcaciones paradas donde antes había un caudaloso río de peces, con su macareo y delfines rosados que ahora agonizan. En vista de ello, propongo un debate sobre clima y cuestión generacional a la luz de las discusiones en torno a lo que se conoce en nuestro tiempo como el mercado de créditos de carbono.

La Amazonía brasileña es escenario de un número creciente de proyectos de conservación de bosques destinados a generar créditos de carbono, también conocidos como proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal). Al supuestamente impedir la deforestación de enormes extensiones de tierras privadas o comunitarias en la selva amazónica, los propietarios de esos proyectos afirman reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así pueden vender créditos de carbono a empresas contaminantes en el mercado internacional.

Un aspecto importante del debate sobre la comercialización de los créditos de carbono es la propuesta de contratos a largo plazo entre las comunidades tradicionales y las empresas intermediarias del mercado de carbono (1). Son ofertas de contratos con una duración de 30 a 40 años, en un contexto de muchas incertidumbres. Hay muchas interrogantes y posiciones que exigen que se analicen detenidamente esos contratos, y menciono aquí la publicación de las abogadas Maria Victoria Hernandez Lerner y Juliana Miranda, que analizaron la evaluación de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) sobre los contratos de créditos de carbono que las empresas proponen a diversos pueblos indígenas de Brasil. (2) Señalaron que los

contratos: a) impiden a los pueblos indígenas llevar a cabo sus prácticas tradicionales, como el cultivo de huertos y la tala de árboles para su subsistencia sin la autorización previa de la empresa; b) son contratos que abarcan más de una generación y no prevén cláusulas de rescisión en caso de que se produzca algún daño a la comunidad indígena; c) son acuerdos firmados por unos pocos individuos, sin participación amplia y sin el consentimiento libre, previo e informado de los grupos afectados; d) en general, tienen cláusulas abusivas.

Los cuestionamientos presentados por la FUNAI nos ofrecen pistas para que hagamos nuestras propias preguntas y comprendamos que los contratos de créditos de carbono que hoy se presentan a las comunidades son, en primer lugar, una cuestión intergeneracional.

En primer lugar, hay que entender que los huertos, el uso de la madera para la construcción de viviendas y la eliminación de plantas para mejorar la producción de cultivos como el asaí son actividades que las comunidades tradicionales llevan a cabo desde hace milenios, con sus prácticas llegando a las nuevas generaciones. El fuego, por ejemplo, ha sido utilizado de forma controlada por numerosos pueblos indígenas y comunidades quilombolas para desbrozar pequeñas superficies, cultivar y favorecer especies consideradas útiles, en lo que conocemos como sistemas agroforestales. (3) Los espacios así construidos son quizá la marca distintiva de ese legado esparcido por las comunidades amazónicas en huertos plantados en canoas, palmeras de asaí, árboles de 'pau-mulato' y pomarrosas alrededor de las casas, y árboles de urucú y cultivos de cebollín que se pueden encontrar por todas partes.

Teniendo en cuenta toda esta historia de los pueblos de los bosques, ¿cómo se abordan en los proyectos de carbono la relación de las familias con el uso del fuego? ¿Sería el fuego un enemigo? Qué raro es leer la noticia de que una de las mayores petroleras del mundo, Shell, está invirtiendo mucho en empresas intermediarias de proyectos de carbono en la Amazonía (4), cuando muchos de esos proyectos atribuyen el problema de la deforestación a cultivos locales que ocupan 0,25 hectáreas, mientras que la emisión de gases de efecto invernadero por parte de las petroleras es incomparablemente mayor. ¿No es algo desproporcionado? ¿No tendría más sentido que empresas como Shell fueran obligadas a tomar acciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que aceleran el cambio climático y vuelven el planeta cada vez más adverso para los seres vivos?

En mi segundo argumento frente a los contratos de créditos de carbono celebrados entre las empresas y las comunidades por 30 años o más, tomo prestado el cuestionamiento expresado por la FUNAI sobre la participación de más de una generación en los proyectos, según Lerner y Miranda (5). Pienso que es sumamente oportuno plantear este tema conceptualizando el capitalismo no como un sistema económico sino como un “orden social”. (6) Según la filósofa Nancy Fraser, este orden (cuya fuerza motriz es la ganancias acumuladas) se apodera y se nutre de la riqueza expropiada a la naturaleza y a los pueblos subyugados. Un orden que debilita progresivamente las estrategias locales de cuidado y creatividad de los trabajadores, al subestimarlas o incluso negarlas por completo. En la relación entre las empresas, las comunidades y los proyectos de carbono, ¿cómo no pensar en lo peligroso que es para las tradiciones locales firmar contratos que afectarán a toda una generación al final del primer ciclo contractual de 30 años, cuyo poder de incidencia e información sobre territorios y familias

quedará en manos de empresas intermediarias y multinacionales? Cuando imagino que niños van a nacer, crecer, pasar a la adolescencia y llegar a adultos en un territorio bajo las cláusulas (7) de un contrato de créditos de carbono, me preocupan las condiciones de vida que tendrán. Algunos empresarios del sector afirman que las inversiones de las empresas en la implantación del sistema de créditos de carbono deben tener la garantía de que se conservará el bosque por determinado periodo para cubrir sus costes, pero, en cualquier caso, ¿quién es el titular legítimo de los créditos? ¿A quién pertenecerían si no a las comunidades? ¿Por qué someterse a 30 años de cumplimiento de cláusulas sin garantizar a los que vendrán el derecho a ser escuchado?

En mi tercer argumento, además de las cuestiones presentadas por la FUNAI sobre los acuerdos firmados por unos pocos individuos, sin la debida participación de las comunidades y con cláusulas abusivas, quiero poner de manifiesto un problema que identifiqué en la forma de organizarse de muchas comunidades del estuario del Amazonas: quizá el formato predominante de las asociaciones comunitarias impuesto a partir de lo establecido por la legislación, que consiste en tener un presidente, un tesorero y un secretario, ya no responde a los retos actuales. (8) Debo aclarar que conozco y conviví con extraordinarias y extraordinarios líderes comunitarios que aportaron mucho a los procesos de organización de sus comunidades y sus mandatos están grabados en la historia y no se pueden perder, hay que respetarlos. Sin embargo, así como el poder hegemónico se transmuta (9) para seguir adelante y ampliar su influencia y ganancias, también la sociedad organizada puede cambiar y reinventarse. Como ejemplo, en 2019 y 2020, me maravilló conocer la organización social de los consejos comunitarios de Concosta y Cajambre, en el Pacífico colombiano, que tenían una consistente participación de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones que orientaban las tareas del representante legal, la persona elegida para llevar a cabo las tareas burocráticas. En esas asociaciones, también hay una tesorería y una secretaria, pero tuve la impresión de que están en permanente estado de asamblea, lo que contribuye mucho a orientar al representante legal y a la administración de la asociación. Este tipo de actuación asociativa es decisiva para proteger a los líderes del acoso y de las intimidaciones del capital. Creo que cuanto más se produzca la escucha intergeneracional y de género, mayor será la capacidad de empoderamiento de la comunidad para no aceptar propuestas arriesgadas. La construcción de una organización autónoma exige tiempo, paciencia y perseverancia. Sobre todo, exige tener confianza en el poder transformador de las nuevas generaciones que comprenden su historia y su realidad. Esto constituye un ejercicio de ciudadanía que debemos practicar desde el principio, exponiendo los distintos escenarios futuros en función de las decisiones que se pretendan tomar. Y llegados a este punto, admito que honestamente no sé si los contratos actuales reforzarán o debilitarán la autonomía de las comunidades. Lo que sí sé es que optar por la cogestión de territorios durante 30 o 40 años con el capital de empresas intermediarias y multinacionales que mueven millones de dólares en monedas o criptomonedas no es justo para quienes aún no están en condiciones de opinar sobre su futuro y que, dado el escenario actual y los actores que se están moviendo, llevarán la peor parte de esas decisiones.

Si el mundo en el que vivimos y que sufre los efectos del cambio climático se encuentra todavía en los tímidos albores de una estructura no patriarcal, no racista, no colonial y no rentista (10), ¿cómo se puede permitir que territorios comunitarios sean liderados por mercados patriarcales, racistas, coloniales y rentistas? Si vivimos en un sistema hegemónico que utiliza la naturaleza para

su acumulación financiera mientras desecha sus residuos sobre la Madre Tierra, ¿cómo podemos creer que sus soluciones nos servirán?

* Este artículo se basa en la tercera carta de una serie del autor sobre el tema de los créditos de carbono en la Amazonia.

Carlos Augusto Ramos, pantojaramos@gmail.com

Doctorando en el Instituto Amazónico de Agricultura Familiar de la Universidad Federal de Pará (INEAF/UFPa), magíster en Ciencias Forestales.

(1) Los participantes en la audiencia pública celebrada en el municipio de Portel, en el estado de Pará, Brasil, el 24 de enero de 2023 y organizada por el Ministerio Público del estado de Pará relataron varias veces un acuerdo firmado entre el presidente de una asociación comunitaria de Portel y una empresa de carbón, cuyo contrato estaría en vigor durante 40 (cuarenta) años (MPA, 2023). [Acta de la audiencia disponible en portugués](#). Acceso: 20/04/2023.

(2) Información técnica N° 21/2021/COPA/CGGAM/DPDS-FUNAI, según LERNER & MIRANDA. Mirar al cielo con los pies en la tierra: Las áreas de uso colectivo y el mercado voluntario de carbono en la Amazonia brasileña: una visión desde los derechos. Informe técnico. 2023. [Disponible en portugués](#). Acceso: 22/09/2023.

(3) CLEMENT et al., 2010 cited by FURQUIM, L.; WATLING, J.; SHOCK, M.; NEVES, E. O testemunho da arqueologia sobre a biodiversidade, o manejo florestal e o uso do fogo nos últimos 14.000 anos de história indígena. In: Povos tradicionais e biodiversidade no Brasil [electronic resource]: contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças / Manuela Carneiro da Cunha, Sônia Barbosa Magalhães and Cristina Adams, organizers; Eduardo G. Neves, coordinator of section 6. – São Paulo: SBPC, 2021. 85 pages.

(4) Información [disponible en portugués](#).

(5) Ditto note 2.

(6) FRASER, Nancy. Capitalismo Caníbal. / Nancy Fraser. – 1st ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2023. Libro Digital, EPUB.

(7) Cabe recordar que la palabra cláusula deriva del diminutivo latino CLAUSUS, "cierre, conclusión", participio pasado de CLAUDERE, "cerrar, encerrar". Así, en un ejemplo ingenioso, una persona queda encerrada en una prisión. [Ver en portugués aquí](#).

(8) Miles de comunidades tradicionales ocupan las orillas de los ríos del estuario del Amazonas y suelen constituir formalmente pequeñas asociaciones de habitantes.

(9) Al igual que la serpiente Surucucu de "Fábula Amarga" del libro electrónico "Gosto de Fábulas". [Disponible aquí](#).

(10) Rentismo es un término utilizado para describir prácticas o estructuras económicas de obtención de ingresos que no se basan en el trabajo o las actividades productivas, sino en la propiedad de activos como títulos financieros, tierras, recursos naturales, etc.

Nueva publicación: “Esquemas de certificación de ‘sostenibilidad’: 30 años de engaño y violencia”

Una compilación de artículos del Boletín del WRM expone el rol perjudicial que cumplen las empresas y organizaciones implicadas en los esquemas de certificación. Después de tres décadas, está claro que la única “sostenibilidad” que garantizan es la de los negocios de las empresas y la de la propia industria de las certificaciones.

Las estanterías de los supermercados y tiendas están llenas de productos certificados. Los paquetes exhiben distintos sellos en los que se indica que los productos fueron fabricados con papel o madera “sostenibles”, alimentos y cosméticos a base de aceite de palma “sostenible” o de soja “responsable”. Incluso a la hora de comprar un pasaje de avión, los consumidores pueden pagar un poco más para asegurarse de que sus emisiones de carbono serán supuestamente “neutralizadas” para garantizar la “sostenibilidad”.

Pero, ¿por qué son necesarios tantos sellos y formas de certificación? ¿Qué se certifica realmente? ¿Y quién se beneficia con ello? Después de 30 años de sellos de certificación ambiental y social, está claro que la única “sostenibilidad” que garantizan es la de los negocios rentables de las empresas y la de la propia industria de las certificaciones.

El primer sello internacional para los productos forestales y su cadena productiva surgió a principios de los años 90, con la creación del Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council - FSC). Aunque su origen se vincula a la presión de la sociedad civil sobre las empresas, el FSC se ha integrado perfectamente a la lógica productiva tanto del sector maderero que opera en los bosques como de las gigantescas industrias productoras de papel y celulosa que utilizan monocultivos de árboles. Y también, de las empresas productoras y distribuidoras de bienes de consumo.

Con el paso del tiempo, tras haber demostrado que no representaba ninguna amenaza -sino al contrario, una oportunidad- para la estrategia de acumulación de ganancias de las empresas implicadas, otros sectores pasaron a crear mecanismos similares. De esta manera, podían limpiar su imagen frente a los daños ambientales y sociales causados por su cadena de producción. Es así que desde los años 2000 se multiplicaron las iniciativas y mesas redondas acerca de la producción responsable o sostenible de productos como el aceite de palma, la soja, el cacao, la caña de azúcar, entre otros.

Todas estas iniciativas tienen varios aspectos en común:

- Son esquemas que suelen aparecer como asociaciones sin ánimo de lucro entre muchos actores e intereses diversos (empresas, ONG, gobiernos, etc.). Sin embargo, en la práctica, los participantes

del sector empresarial y sus aliados, como las grandes ONG conservacionistas, dominan estas iniciativas, imponiendo sus intereses en una relación de poder muy desigual entre sus miembros. Esto también se evidencia en el enfoque dado a los aspectos técnicos y de procedimiento, que con frecuencia dejan los conflictos reales de las comunidades afectadas fuera del alcance de la certificación.

- Son mecanismos que establecen orientaciones y directrices de operación que deberán cumplir las empresas de forma voluntaria, con lo que resulta imposible que haya consecuencias jurídicas cuando se infringen las normas -que, conviene señalar, son elaboradas y evaluadas por las propias empresas.
- Son iniciativas sujetas a la lógica del mercado y de su expansión. Es decir, los sellos de certificación han cobrado importancia tanto para que las empresas puedan obtener financiación para sus proyectos de expansión como para atraer a los consumidores, especialmente a los de zonas urbanas y a los del norte global.
- Son mecanismos con sede en países del Norte y cuyos órganos directivos están conformados mayoritariamente por hombres y personas blancas. Las comunidades rurales del Sur, que se enfrentan a las plantaciones certificadas, cumplen el rol de meras receptoras de determinaciones que se imponen desde el exterior sobre el uso del espacio que habitan. Y si buscan denunciar la actuación de alguna de las empresas con certificación, tendrán que cumplir con el protocolo elaborado por el propio sistema de certificación sobre qué hacer en esos casos.
- Son utilizados por las empresas como mecanismos de defensa ante las críticas sobre el impacto de sus actividades: "Nuestros productos están certificados...", "El proyecto tiene certificación...", como si ello garantizara que no hay motivos para preocuparse.

En cualquier caso, estos mecanismos de certificación no han frenado la expansión destructiva de las plantaciones industriales de árboles, de palma aceitera, de soja, etc., ni han sido capaces de resolver los conflictos generados con las comunidades tradicionales y los Pueblos Indígenas. Tampoco podrían hacerlo, ya que están diseñados para posibilitar la continuidad y expansión de los patrones de acumulación corporativos que dependen intrínsecamente de una dinámica depredadora. De hecho, el principal denominador común de los sistemas de certificación es que garantizan a las empresas implicadas un sello verde, lo que contribuye a su objetivo principal de maximizar sus ganancias.

En otras palabras, los sellos de certificación son necesarios para que las empresas depredadoras puedan obtener cierta legitimidad ante sus consumidores e inversores, dada la gran cantidad de reportajes, notas y estudios que señalan sus efectos nocivos como el acaparamiento de tierras; los problemáticos o inexistentes procesos de consulta a las comunidades; la contaminación por agrotóxicos; la degradación de la tierra; los empleos precarios y humillantes; el abuso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, entre muchos otros impactos derivados de la producción en grandes monocultivos. Así, las entidades certificadoras se han convertido en una pieza central que las empresas utilizan para legitimar su expansión territorial y económica en el

sur global, engañando a los consumidores con un discurso de “sostenibilidad”. Esto nos permite afirmar sin reservas que la propia certificación se ha convertido en una causa subyacente de la deforestación.

Además, es importante mencionar que la idea de certificación está cobrando nuevas formas. Gracias a la creación de mecanismos de compensación de las emisiones de carbono y de la pérdida de biodiversidad, nuevas mercancías que ya nacen vinculadas a los mecanismos de certificación. En este nuevo mercado, los *créditos de carbono* y los *créditos de biodiversidad* -emitidos por los esquemas de certificación- representan una supuesta garantía de que las emisiones de gases de efecto invernadero o la destrucción de biodiversidad serán debidamente compensadas en otro lugar. A diferencia de la madera, el papel, el aceite de palma o la soja, donde se “añade” la certificación al producto con un sello, en los mercados de carbono y de biodiversidad es la propia certificación la que hace que el producto (abstracto) sea viable para el consumo. En otras palabras, la propia mercancía se presenta como una supuesta garantía, aunque virtual, que se puede obtener a través de metodologías cuestionables y que está plagada de intereses descaradamente sospechosos.

Esta recopilación de artículos de boletines del WRM busca poner de manifiesto el rol perjudicial que cumplen las empresas y organizaciones implicadas en los esquemas de certificación. El WRM considera importante recalcar que, después de tres décadas con cada vez más sellos de certificación ambiental en los mercados, es imperativo poner fin a este maquillaje verde que, en definitiva, en lugar de combatir la devastación ambiental y los problemas sociales asociados a las iniciativas corporativas, oculta y sostiene su lógica depredadora.

[Lee y descarga la publicación aquí.](#)

Camerún: Mujeres decididas a recuperar sus tierras ocupadas por la palmícola Socapalm/Socfin

La Asociación de mujeres Afrise lanzó una petición internacional para detener la replantación de monocultivos de palma aceitera alrededor de sus casas y de las tumbas de sus ancestros. Denuncian décadas de abusos sexuales, despojo de tierras y miseria. Exigen que les devuelvan su territorio para llevar adelante una vida digna.

Un grupo de mujeres están decididas a detener la replantación de palma aceitera en la aldea de Apouh en Ngog, en el distrito de Edéa 1, departamento de Sanaga Marítimo, región Litoral, en Camerún. Denuncian que la empresa Socapalm continúa estableciendo monocultivos alrededor de las casas y de las tumbas ancestrales de la comunidad, lo que genera gravísimos impactos en sus vidas.

“Si no se detienen estas operaciones, nosotras, las mujeres que vivimos cerca de Socapalm en Edéa, tendremos que soportar otros 50 años de sufrimiento, abusos, violaciones, robos, hambre, frustración y violaciones de nuestros derechos, nuestra intimidad y nuestra dignidad, lo que arrinconará a toda nuestra comunidad a sobrevivir de una forma fundamentalmente dolorosa, injusta, miserable e insoportable”, denunciaron en una petición internacional lanzada el pasado 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En la petición, las mujeres -organizadas en la Asociación de Vecinas de Socapalm en Edéa (Afrise, por sus siglas en francés)- advirtieron: “La historia de abusos que cometen las empresas del sector de la palma aceitera no es nueva en Camerún, así como tampoco lo es en la región”. [Aquí se puede escuchar](#) (en francés) el testimonio de Ms. Ngon Bissou Félicite Hortenseof, presidenta de Afrise.

Socapalm es una subsidiaria de la empresa Socfin, un grupo agroempresarial con sede en Luxemburgo, que se dedica al cultivo de palma aceitera y caucho. Socfin, cuyos accionistas mayoritarios son el millonario francés Vincent Bolloré y la familia belga Fabri, opera en ocho países de África central y del oeste. Su origen en la región se remonta a épocas coloniales, cuando en connivencia con el Banco Mundial, logró apropiarse de miles de hectáreas de tierra para su beneficio (1).

Hoy en día, Socfin controla aproximadamente 58,000 hectáreas en Camerún que le fueron otorgadas en concesión (2). Y, actualmente, está en proceso de renovar sus plantaciones, reemplazando los ejemplares de palmas más viejos y menos productivos por nuevas plantas para poder incrementar sus ganancias, que en 2021 superaron los 80 millones de euros (3).

Como muestra del desprecio hacia las comunidades que llevan años de lucha reclamando sus tierras, la empresa está plantando a escasos metros de las casas, e incluso sobre las tumbas de sus seres queridos (4). Las comunidades vienen intentando por todos sus medios detener esta barbaridad. Sin embargo, Socapalm suspendió el diálogo con ellas y avanza con las plantaciones.

Las mujeres de la comunidad le han dirigido una carta al presidente de Camerún pidiéndole que actúe. Pero no hubo respuesta.

Sumado a ello, usando otra de las tácticas propias de estas empresas dirigidas a silenciar a quienes se oponen a su accionar, el líder tradicional de la comunidad fue enviado a prisión, hecho que las mujeres también denuncian en su petición.

Las plantaciones industriales de palma aceitera son sinónimo de acaparamiento de tierras, destrucción de territorios, esclavitud, y múltiples formas de violencia hacia las comunidades, violaciones sexuales, fraude económico (5), entre muchas otras. Socfin no está exenta, por el contrario, es un claro ejemplo de todo lo anterior (6). La violencia es intrínseca al modelo de plantaciones a gran escala, que necesita homogeneizar el territorio, destruir lo colectivo y las formas de producción y reproducción tan ricas y diversas.

Las empresas de palma necesitan, además, desarticular la resistencia, y sobre todo, la lucha de las mujeres por recuperar sus tierras y el control colectivo de sus territorios y sus vidas. Es así que la violencia física y sexual para controlar, amedrentar y callar a las mujeres se vuelve una táctica de uso cotidiano. Los abusos sexuales son moneda corriente para las mujeres y niñas que deben diariamente atravesar tenebrosas plantaciones para poder ir a la escuela, a sus huertos, a buscar agua, o a las ferias a comercializar sus productos, ya que sus pueblos han quedado completamente cercados por monocultivos.

Hartas de esta situación, las mujeres de Afrise lanzaron la petición en la que exigen a la empresa y al presidente de Camerún ser escuchadas. En ella, describen la situación que, con urgencia, debe terminar: “El 90% de nosotras entregamos nuestros cuerpos a los guardias para acceder a la plantación. Nuestros hijos no son empleados por la empresa y acaban drogándose, dedicándose a actividades ilegales o tomando la ruta de la inmigración ilegal para morir en el mar. Estamos abandonadas a nuestra suerte en un sistema que no es inmune a la corrupción”.

Y manifiestan: “No aceptaremos pasar los próximos 50 años en esta miseria. Estamos decididas a luchar para liberar nuestras tierras y conseguir espacios de vida para nuestros hijos, las generaciones presentes y futuras.”

¡Expresamos nuestra total solidaridad con estas mujeres, que a pesar del sufrimiento, resisten, se organizan y luchan por recuperar su dignidad! **[Les invitamos a leer la petición completa y darle la mayor difusión y visibilidad posible.](#)**

(1) Boletín WRM 252, [El legado perenne de un proyecto poco conocido del Banco Mundial que le aseguró las plantaciones africanas a multimillonarios europeos](#), Noviembre 2020.

(2) CorpWatch, [Palm Oil Giant SOCAPALM to Return Sacred Land Back to Mbonjo Villagers in Cameroon](#), mayo 2023.

(3) Watch Africa, [Socfin exploitation of rubber & palm oil linked to deforestation & human rights abuses in Ghana & Nigeria](#), October 2023.

(4) Rights of women living near agroindustries, ACCESS to land against famine. [Video in French.](#)

(5) Mongabay, [Plantation giant Socfin accused of dodging taxes in Africa](#), October 2021.

(6) Boletín WRM 233, [Las plantaciones de SOCFIN en África: muchas zonas de violencia y destrucción](#), septiembre 2017.

Chile: La resistencia al modelo forestal en el Wallmapu, territorio Mapuche

Comunidades Mapuche resisten desde hace décadas los impactos del modelo forestal basado en monocultivos a gran escala. En esta entrevista, Pablo Reyes Huenchumán, vocero de la comunidad Paillakawe, explica cómo se organizan y cuáles son los principales desafíos en la lucha por la recuperación del territorio y el mantenimiento de su cultura.

Comunidades Mapuche resisten desde hace décadas los impactos del modelo forestal impuesto en Chile por un puñado de empresas en connivencia con los gobiernos. Esta industria, basada en monocultivos a gran escala, ha provocado invasión de tierras, destrucción de bosques, contaminación ambiental, desmembramiento social y pobreza. Ante esto, las comunidades se organizan para recuperar tierras y desarrollar su vida de acuerdo a la cultura y cosmovisión del Pueblo Mapuche.

Para profundizar sobre esta lucha, compartimos fragmentos de una entrevista realizada a Pablo Reyes Huenchumán, *werkén* (vocero) del *Lov* (comunidad mapuche) Paillakawe, [publicada originalmente en la plataforma Undisciplined Environments](#) con motivo del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, en septiembre pasado. El *lov* Paillakawe se encuentra en un proceso de recuperación territorial en el Golfo de Arauco, región del Biobío, en Chile, parte del Wallmapu (territorio ancestral Mapuche).

¿Cuales que son los principales impactos del modelo forestal basado en plantaciones a gran escala en su territorio?

Los impactos llevan más de 50 años. El modelo se instauró durante la dictadura de Pinochet, en la que se agudizó la usurpación del territorio mapuche en esta zona. La industria forestal, en concreto aquí la del grupo Angelini, la forestal Arauco, fue adquiriendo gigantescos espacios territoriales a costa de la gente, gracias a los amigos y familias de la dictadura. Por ejemplo, en este sector uno de los personajes fue [Julio Ponce](#), yerno de Pinochet, que facilitó que muchos predios le fueran entregados a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) donde trabajaba, y los acabó vendiendo a precios irrisorios, terminando en manos del grupo Angelini. Actualmente la forestal Arauco tiene casi dos millones de hectáreas a su nombre.

Así se asienta este modelo, con gente campesina y Mapuche desplazadas. Hay historias de nuestra familia, de nuestro *lov* (comunidad mapuche), que aun recuerdan cómo les quemaron las casas y fueron amenazadas por guardabosques, quienes les decían que tenían que retirarse porque esto era sector forestal. Muchos predios agrícolas pasaron a ser forestales, degradando el suelo. La instalación de la industria forestal impacta muchísimo desde entonces, con efectos a nivel social, ambiental, político y territorial.

¿Qué factores contribuyen a que se mantenga este modelo forestal?

Las empresas forestales y en general, el capital, están en constante reconversión, limpiando su imagen. Por un lado, se apoyan en instrumentos como la certificación FSC (Forest Stewardship Council), que les permite vender su producto a un mayor precio, diciendo que trabajan de una manera ordenada, ambiental y sin conflictos con las comunidades aledañas, lo cual es una mentira.

La empresa forestal viene ahora con la energía eólica. En el 2019, la forestal Arauco presentó el [proyecto M.A.P.A.](#), que busca ampliar la planta de celulosa que ya está situada en el golfo de Arauco. Junto a ello, se planeó un proyecto de un parque eólico, al que se le llamó [Viento Sur](#). En abril de 2022, en el proceso de consulta indígena y ciudadana, fuimos invitados. Les queríamos decir que una de las torres de este proyecto eólico está planeada sobre un Rewe (altar sagrado mapuche). Así como en el mundo *wingka* (no Mapuche) hay iglesias y mezquitas, nosotros movilizamos nuestra espiritualidad a través del Rewe. Lo que propone este proyecto es algo muy violento, para nosotros es inconcebible dejar que esto ocurra. Y pese a que les dimos toda la información, ninguno de nuestros argumentos fue tomado en cuenta.

Además, el capital privado se aprovecha de las comunidades que nosotros llamamos *yanakona* (Mapuche que traiciona su pueblo). Son comunidades afines a los intereses del capital, que han negociado, por ejemplo, la ampliación del proyecto M.A.P.A. Las empresas ofrecen compensación económica a las comunidades, pero hasta ahora no hemos visto que una sola de ellas haya salido de la pobreza con las migajas que les da la empresa. Pero parece que es una estrategia: estas comunidades, a través de sus dirigentes, son compradas. Así se desmembra el tejido social mapuche.

Y esto no solo pasa en Chile, sino en toda América Latina. El capitalismo latinoamericano es mediocre: siempre se conforma con vender la materia prima lo antes posible. No se pretende generar inversión para que los pueblos puedan ser también dueños de ese recurso. Así, el estado sigue siendo mediocre con su propia gente, generando políticas de desarrollo a través de estas grandes empresas como solucionadoras de problemas. Por ejemplo, que sea la empresa forestal la que soluciona el problema de empleo. Por eso les dan el espacio para que inauguren centros culturales, deportivos. Así el estado permite y facilita que la empresa se meta en el tejido social. A través de la propaganda y de los medios de comunicación ellos han ganado todo este espacio.

¿Cómo se organizan para afrontar los impactos de este modelo y ganar soberanía?

Como Pueblo Mapuche nos organizamos a través de los *Trawun*, que son asambleas de las comunidades. En el *Trawun* se deciden qué acciones se van a tomar. Fue en un *Trawun* que acordamos llevar adelante el proceso de control territorial, que consiste en tomar los predios, que llamamos en recuperación, y por tanto alejar a la forestal, aun considerando que puede haber persecución, cárcel y hasta la muerte. Actualmente el *Lov Paillakawe* controla unas mil hectáreas, y si consideramos también el territorio controlado por otros *lov* y comunidades vecinas en el Golfo de Arauco, sumaríamos unas entre 7000 y 8000 hectáreas. Desde hace tres años, la forestal no ha

podido entrar en los territorios que actualmente tenemos controlados, salvo en una confrontación que hubo en el *Lov Vilo* en el sector Huape, que fue una acción de los carabineros, la policía militarizada intentando entrar con tanquetas en el territorio recuperado.

Estas recuperaciones se vienen haciendo desde hace más de 20 años en otros territorios, más al sur en la provincia de Arauco, planteadas como procesos de control territorial por El Consejo de Todas las Tierras y sobretodo por la Coordinadora Arauco Malleco. El control territorial implica quedarse en el territorio, hacer vida y ejercer la soberanía en este espacio. Y eso es lo que estamos haciendo: chacra para la siembra de papa, arveja, habas, la crianza de gallina y algún cerdo. Pero esto tiene sus consecuencias: por haber entrado en un predio y quedarnos, la forestal nos tiene con medidas de criminalización, especialmente a los dirigentes, con demandas penales de usurpación. También sufrimos otras formas de hostigamiento, a través de drones, de helicópteros, persecuciones y hasta disparos por parte de los guardias forestales. Todos los que participamos de procesos de recuperación territorial sabemos que nos exponemos a eso.

¿Cuales son los principales desafíos en esta lucha?

La militarización es un desafío aun con este gobierno liderado por (Gabriel) Boric. Tememos que vayan a estar los cuatro años de gobierno con el [Wallmapu militarizado](#). De esta zona del Golfo de Arauco no se habla tanto en la prensa, aunque cuando tomamos las calles sí se nos llamó violentos, terroristas, o últimamente que somos narcotraficantes. Aquí la única violencia que se ejerce es la de las empresas y los guardas forestales. Otro de los desafíos es lidiar con las estrategias de la empresa para generar divisiones y cooptar dirigentes. Y además el colonialismo, que sigue estando muy presente.

¿Cuales que son las medidas concretas que el Estado y otras instituciones podrían tomar para priorizar el derecho a decidir de los pueblos?

Como *Lov Paillakawe* consideramos que la única medida que sería realmente efectiva que podría realizar el Estado chileno es la expropiación de las tierras a estas grandes empresas forestales. Aunque existen mecanismos de devolución de tierras a través de la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) están obsoletos. Los últimos gobiernos han subido la cuota para la compra de tierra, pero la realidad es que cada vez se compra menos tierra porque los propietarios legales de esos terrenos suben los precios. Así, las tierras que se entregan pueden ser de hasta tres hectáreas. Los Mapuche siempre hemos criticado esta forma de gestionar el territorio porque es muy mezquina, ridícula: el *lov* es una forma de vida comunitaria, la forma política y familiar de desarrollarse en un territorio, que son espacios amplios. Nunca se va a desarrollar en tres hectáreas, sino en un territorio, con elementos físicos, naturales, espirituales, que los Mapuche necesitamos para la plenitud. Así que esta forma de estos últimos años de devolución de tierras no es algo que como Pueblo Mapuche valoremos. Lo más revolucionario sería que se expropiara por parte del estado las tierras forestales a grandes latifundistas para la gestión de las comunidades.

Otra medida que se debería tomar es que las consultas relacionadas al [Convenio 169](#) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales sean vinculantes, no solo al Pueblo Mapuche sino a todos los Pueblos Indígenas.

¿Cómo se imaginan o sueñan un futuro de soberanía territorial?

La mayor parte del territorio bajo control actual por el *Lov Paillakawe* son espacios altos, cerros, son las montañas de la costa. Hay unas 200 hectáreas de bosque nativo, rico en biodiversidad, pero el resto es, o era, monocultivo. A pesar de ser un espacio montañoso, en ciertos espacios se pueden desarrollar una agricultura de subsistencia, familiar, de *lov* o de *Trafkintu* (intercambio) de productos, como hacía el pueblo Mapuche antes de la invasión europea o incluso la incaica, con pequeña producción agrícola, de choclo, diferentes tipos de legumbres, habas, porotos. Así, soñamos con una agricultura familiar y local, con productos de la zona y sin uso de agroquímicos, que puedan darnos estabilidad y podamos ver crecer a nuestras familias, sin pasar hambre y sin pasar por ser esclavos de los latifundistas. Y también aportando al resto de la población, que como pueblo Mapuche podamos también aportar con trigo y papa a las ollas comunes. Esto es lo que se plantea, poder volver a la soberanía alimentaria para nosotros y para la población, entre los pueblos.

En los espacios dónde cuesta mucho que vuelva ese manto orgánico, en esos espacios sí sería aceptable el monocultivo, no al nivel que tiene la forestal aquí en la zona, sino a muy baja escala, una o dos hectáreas, para la producción de leña, que sirva para cocinar y para la construcción de estructuras menores de madera y mejoras en la *ruka* (casa), evitando así la tala del bosque nativo para estos fines. Y también dejando espacios sin tocar, de bosque nativo, espacios donde la *Ñuke Mapu* (Madre tierra) tenga solo su espacio, y, nosotros tener espacios para la práctica de nuestra espiritualidad, para celebración de *Trawun*, de *Ngillatun* (ceremonia Mapuche), de *Palín* (juego que sirve para afianzar alianzas entre diferentes *lov*). Eso es lo que queremos reconstruir.

Marien González-Hidalgo

Investigadora asociada a la División de Desarrollo Rural de la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias (SLU).

Antes, durante y porvenir de la victoria por la defensa de la vida en Panamá

El 2023 finalizó con una victoria de la lucha popular por la defensa de la vida en Panamá, con repercusión en todos los lugares del planeta donde se llevan a cabo procesos de defensa territorial y resistencia frente a conflictos ambientales.

La masiva y permanente movilización del pueblo panameño en contra de la extracción minera en una zona ambientalmente relevante y sensible de su territorio concluyó en la declaración de inconstitucionalidad del contrato ley 406 que permitía la operación de la minera Cobre Panamá, subsidiaria de una de las mayores extractoras de este mineral en el planeta, First Quantum Minerals FQM, con sede en Toronto, Canadá. Lo anterior conlleva, entre otros, el cese de operaciones y el cierre de la mina.

Sin duda alguna, este resultado sienta un precedente valioso para miles de procesos de defensa territorial alrededor del planeta, que ratifica que es posible lograr la victoria, incluso ante corporaciones que se llegan a considerar poderosas.

No obstante, este no es el resultado de las acciones y movilizaciones que tuvieron lugar por más de cinco semanas entre octubre y noviembre de 2023, sino que tiene antecedentes más de 25 años atrás, por lo cual es pertinente analizar el proceso en retrospectiva.

¿Qué pasó antes?

La problemática nos remite al inicio de la década de 1990, cuando tuvieron inicio la prospección y estudios para la explotación minera, paralelo a lo cual tuvo inicio la resistencia por parte de comunidades y organizaciones preocupadas por los impactos que sabían podrían sobrevenir. En 1996 se otorgó la concesión a la minera Petaquillo para extracción de oro, que luego se amplió a la explotación de cobre y más adelante terminó cediendo la concesión a Minera Panamá, subsidiaria de FQM.

La preocupación se originaba, entre otras razones, en la localización de la mina, en medio de territorios con alta diversidad biológica. Mesoamérica une dos inmensas masas continentales, que en eras geológicas anteriores estuvieron separadas, pero con el afloramiento de este territorio, tuvieron un puente para la conexión e intercambio de poblaciones de plantas y animales, que justo en Panamá tienen su punto más estrecho, siendo entonces un tipo de embudo donde se concentra gran parte de la biodiversidad del subcontinente. Ese escenario es también el territorio de pueblos indígenas, comunidades locales y campesinas; es decir que la diversidad no es alta solamente en términos biológicos sino culturales.

Considerando lo que venía sucediendo, tuvo inicio la organización social. Hace 20 años aproximadamente existió la comisión pro-cierre Petaquillo, para ese entonces el involucramiento era menor, una vez que las comunidades tenían esperanzas en las promesas de desarrollo, empleo

y bienestar de la empresa minera. Evidentemente, como suele suceder con las empresas extractivistas, dichas promesas no se cumplieron, generando el descontento, indignación y movilización de las semanas recientes. En 2012 se pretendió sancionar una ley denominada popularmente como ley chorizo, que buscaba aprobar la minería en las comarcas panameñas, desencadenando una mayor movilización social. Cuando se estaba saliendo del periodo de pandemia, el gobierno impuso el discurso de dinamizar la minería para la recuperación económica del país. Esto levantó todas las alertas, así que en mayo de 2021 se conformó el Movimiento Panamá Vale más Sin Minería, con más de 40 organizaciones vinculadas, explica Damaris Sánchez, activista ambiental de Fundiccep. Ese mismo año se presentó una propuesta de moratoria a la minería metálica que no fue aceptada, mientras el gobierno seguía empeñado en su proyecto.

Aunque en principio se trataba de una área menor, el proyecto que acaba de ser detenido abarcaba 12.955 hectáreas y se encontraba sobre tres áreas protegidas, el Parque Nacional General de División Omar Torrijos, el Parque Nacional Santa Fe y el área de Uso Múltiple de Donoso. Dichas áreas protegidas forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), una estrategia creada a inicios de la década de 2000 con propósitos como el de garantizar la conectividad ecosistémica desde el Darién, en Panamá, hasta la selva maya, en México. El CBM enlaza áreas protegidas para reducir las amenazas sobre la biodiversidad, y busca generar oportunidades económicas y sociales a las poblaciones aunque parece no estar funcionando de la manera esperada.

Desde 1997 la mina ha estado operando en la zona, aunque de manera interrumpida, entre otras razones por los múltiples procesos legales en contra. A pesar de ello ha provocado serios impactos ambientales. Las comunidades aledañas a la mina han presentado denuncias y solicitudes al Ministerio de Ambiente de Panamá sobre cambios en las características de los cuerpos de agua, sin lograr siquiera una inspección. En 2021 se rompió una tubería que generó vertimientos al río Pifá (1).

En el marco del Día de la Tierra, en 2022, el Movimiento Panamá Vale más sin Minería presentó el análisis de varios informes del Ministerio de Ambiente, en el cual el propio Ministerio da cuenta de múltiples impactos e incumplimientos del proyecto Cobre Panamá (2). Entre los hallazgos se encuentra el hecho que la empresa realiza la descarga de residuos a cuerpos de agua, sin permiso del Ministerio, involucrando posibles contaminantes peligrosos como metales pesados. Para ese entonces, los incumplimientos se sumaban a más de otros 200, identificados en informes previos, y la empresa tenía una deuda que ascendía a más de 11 millones de dólares con el Ministerio.

Ahora bien, llaman especialmente la atención los impactos sobre la selva y cobertura vegetal, entre ellos la tala de 876 hectáreas por encima de la superficie que había sido autorizada, llegando así a casi 3.000 hectáreas afectadas por el proyecto. A ello se suma el incumplimiento a los compromisos de reforestación, los cuales forman parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En ese sentido se identificaron fallas en la reforestación de 1.300 hectáreas para el periodo 2012 a 2015. Debe enfatizarse el hecho que la citada reforestación se incluye como medida de compensación por la destrucción de la vegetación, denominada tala autorizada. En 2016, el WRM

realizó una visita a la zona, antes de comenzar el proyecto actual, advirtiendo el uso de la compensación como una estrategia para viabilizar la explotación minera en áreas protegidas (3). Las promesas de la empresa incluían el seguimiento de los estándares de la Corporación Financiera Internacional, en los cuales basaron sus planes de compensación por pérdida de biodiversidad, exhibiendo en su página web que “está comprometida a mantener un impacto neto positivo sobre la biodiversidad y ser un líder mundial en la gestión de la biodiversidad”.

En 2017 se emitió una sentencia de inconstitucionalidad frente a la operación del proyecto minero, la cual no fue publicada en la gaceta oficial del Estado, lo que hizo que la sentencia quedara sin efecto. La publicación solo se dio hasta el año 2022, frente a lo que la respuesta del actual gobierno fue dar inicio a una nueva negociación con la empresa minera, con el fin de expedir un nuevo contrato, como explica el líder y activista comunitario Rubén Bernal.

¿Qué pasó durante?

En octubre de 2023, inició la movilización social que fue noticia internacional por su magnitud, represión, criminalización, pero también por su desenlace y resultados.

Lo que estaba en curso era el intento del gobierno y la minera por validar un contrato inconstitucional, corrigiendo supuestamente los errores del anterior y recurriendo a una agresiva campaña publicitaria que mostraba, por diversos medios de comunicación, supuestos beneficios para la población. No obstante, las razones de inconstitucionalidad se mantenían. Durante los debates en la Asamblea se dieron intervenciones a favor y en contra, pero un aspecto positivo se destacaba, las comunidades en todo el país estaban muy al tanto de lo que estaba sucediendo. Seguramente por temor a esa situación, como explica Damaris Sánchez, se detuvo el proceso y se organizaron visitas privadas al área del proyecto; al retomar los debates, se impidió la entrada del público, y en solo tres días se surtió todo el proceso que debió haber tomado mucho más tiempo, culminando con la sanción del contrato ley el 20 de octubre. Esta vez se tuvo la precaución de publicar en la gaceta oficial.

Las organizaciones y movimientos sociales, con bastante dificultad, consiguieron y estudiaron el texto del contrato, presentando a la sociedad panameña los exabruptos del mismo, entre lo que se cuenta la extensión del contrato a 60 años, la prohibición de paso sobre el espacio aéreo de operación del proyecto, la ampliación en 5000 hectáreas para la concesión, la posibilidad de explotación no solo de cobre, sino de oro y otros materiales, la prohibición de movilización para la población, por lo cual terminaron por declarar el proyecto como un enclave colonial.

Mientras tanto, la juventud en ciudad de Panamá dinamizó la resistencia, jugando un papel fundamental en la victoria obtenida. Entre sus acciones están el cerco establecido a la sede de la asamblea, exigiendo que se escuchará al pueblo, lo que fue usado como excusa para desatar la represión. Uno de los jóvenes perdió un ojo por la acción de los agentes de Estado, incrementando la indignación de la población, que ya venía sufriendo las condiciones de un elevado costo de vida en el país. El 23 de octubre la gente salió a las calles, campos, carreteras y hasta el mar, sin parar

de manifestarse y movilizarse hasta el 28 de noviembre, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo de inconstitucionalidad del contrato ley.

La primera semana, hasta el 29 de octubre, fue crítica. El presidente hizo alocuciones, amenazaba con judicializar, llegando a proponer un referéndum, a lo que el pueblo contestó que ya estaba en las calles manifestando su posición y decisión. La respuesta popular fue incrementar la resistencia, que llegó a paralizar no solo la ciudad capital, sino todas las actividades principales alrededor del país, incluso la carretera panamericana, principal vía de Panamá, fue bloqueada.

Las formas de resistencia fueron diversas, hubo marchas, vigiliias, bloqueos. Los lancheros en la zona del puerto donde operaba la minera atravesaron sus lanchas para impedir que la empresa sacara los minerales. Las y los médicos y maestros se sumaron, las escuelas detuvieron las clases; las personas que habitan Colón y los distritos de Donoso y Omar Torrijos, así como una parte de Veraguas, que en otros tiempos no participaron del proceso de resistencia -por las esperanzas de trabajo y bienestar,- esta vez tuvieron la posición y resistencia más firmes. Se estima que durante algunos días, más de 250.000 personas llegaron a movilizarse. Todo el país estaba detenido hasta tanto la voluntad popular se hiciera efectiva.

Ni siquiera el rigor de la represión y judicialización pudieron hacer mella en la movilización, a pesar que cuatro personas fueron asesinadas y más de mil se registran como detenidas durante las manifestaciones.

La presión y vigilancia sobre la Corte Suprema de Justicia fue impresionante. Un campamento fue instalado alrededor de su sede durante 12 días, haciendo evidente que se les estaba observando y esperando su decisión. El mensaje era claro, si fallaban a favor de la empresa, más allá de la inconstitucionalidad, lo que podría suceder en las calles era inesperado y con repercusiones de gran magnitud.

El 28 de noviembre la Corte emitió su sentencia, el contrato de Cobre Panamá es inconstitucional, legitimando así la lucha de la gente en los campos, mares y calles. 25 artículos del contrato era inconstitucionales; las denuncias por el impacto ambiental fueron tenidas en consideración por la Corte, que también consideró la falta de licitación pública y consultas ciudadanas. Las repercusiones del fallo llegan, inclusive, a la orden de cierre de la mina, decisión sin precedente en el país centroamericano

Retos y porvenir

La compañía minera, por medio de Cobre Panamá, manifestó que “la transparencia y el cumplimiento de la ley siempre han sido fundamentales para el desarrollo de sus operaciones y se mantiene abierta al diálogo constructivo para alcanzar consensos”. Acto seguido, lo que la empresa entiende por “diálogo constructivo”: First Quantum demandó a Panamá ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI (4).

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

Divisiones comunitarias, azuzadas por sectores particulares, dejan el reto de recomponer el tejido social en algunos lugares, pese a lo cual, la evaluación realizada por la población es más que positiva.

La victoria del pueblo panameño es un ejemplo para quienes defienden las selvas, los territorios y la dignidad de los pueblos que los habitan, además de ser inspiración para las luchas y resistencias en curso por todo el planeta.

Lo que sucedió representa un punto de inflexión en la historia política y de participación en Panamá. La indiferencia fue vencida, quienes antes no participaban, se involucraron por completo en el proceso descrito; la comunicación fue de carácter popular, marcando la autonomía en relación a los medios de comunicación tradicionales y empresariales.

La lucha continua a futuro para que la minería sea prohibida en la Constitución.

Secretariado Internacional del WRM

(1) Artículo [“Panamá: un grito por la justicia ambiental y contra la minería metálica”](#), en Hora Cero, por Krissia Girón.

(2) Declaración del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería.

(3) Artículo [“Las compensaciones ambientales en Panamá: una estrategia que abre áreas protegidas para la actividad minera”](#), del Boletín del WRM, por Teresa Pérez

(4) Article [“Panama Protestors Defeat First Quantum Minerals’ Copper Mine”](#), at CorpWatch, by Paula Reisdorf.

RECOMENDADOS

Abusos sexuales sistemáticos en un proyecto de 'compensación' de emisiones de carbono en Kenia

En un año lleno de escándalos en torno a proyectos REDD, este informe de SOMO publicado en noviembre de 2023 revela cómo la empresa estadounidense Wildlife Works es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en el proyecto Kasigau, en Kenia. El informe se basa en testimonios de decenas de miembros de la comunidad local que relataron acoso y abusos sexuales generalizados por parte de altos empleados de Wildlife y guardias del proyecto. Se trata de una prueba más de cómo, en la sociedad patriarcal en la que vivimos, las mujeres son siempre las más afectadas, especialmente en iniciativas y mecanismos en los que se las relega a un rol pasivo. [Acceder al reporte aquí.](#)

Declaración de solidaridad con la lucha decolonial del pueblo palestino

Reunidos en el Segundo Foro Social Temático sobre Minería y Extractivismo, celebrado en Indonesia en octubre de 2023, representantes de comunidades y organizaciones de todo el mundo que luchan contra la minería y sus impactos se reunieron para intercambiar, conocer y elaborar estrategias en torno al derecho a decir no al extractivismo. En la clausura del encuentro, integrantes de la red Sí a la Vida, No a la Minería junto a otros participantes expresaron su solidaridad con el pueblo de Palestina y su lucha por la autodeterminación a través de una declaración que vincula el colonialismo, la minería, la militarización y la guerra, y que reclama la unidad entre todos y todas quienes sufren sus consecuencias y buscan derrotarlos. [Todavía se puede firmar la Declaración aquí.](#)

Herramientas para luchar contra las falsas soluciones climáticas

La recopilación de materiales publicada por Amigos de la Tierra Internacional en noviembre de 2023 es una herramienta muy útil para las organizaciones y militantes comprometidos que se oponen a las falsas soluciones climáticas. La publicación se divide en tres partes: la primera presenta una serie de evidencias sobre los impactos de las falsas soluciones en todo el mundo; la segunda reúne una lista de enlaces a informes, resúmenes, artículos y reportajes sobre el tema; y la tercera es una guía para comprender los múltiples y complejos mecanismos que impulsan de forma peligrosa los mercados de carbono. [Accede aquí.](#)

Atlas de los Pesticidas

En todo el mundo se utilizan pesticidas en cantidades cada vez mayores. El agronegocio los defiende como si fueran parte ineludible de la producción de alimentos. La edición brasileña del Atlas de los Pesticidas de la Fundación Heinrich Böll, presentada en diciembre de 2023, es la última publicación de este material que ha sido adaptada y presentada en más de ocho países y cinco idiomas. En el material se ofrece un amplio panorama sobre el tema, con datos sobre el uso y los impactos de los agrotóxicos en la agricultura, la salud y la economía, entre otros. [Accede aquí.](#)

**Todos los artículos del Boletín pueden ser reproducidos y difundidos con la siguiente fuente:
Boletín 268 del Movimiento Mundial por los Bosques tropicales (WRM): “La estafa verde:
opresión, conflictos y resistencias” (<https://wrm.org.uy/es/>)**

[Suscríbete al Boletín del WRM](#)

*El Boletín busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos
en la defensa de sus territorios y bosques.
La suscripción es gratuita.*

¿Te perdiste la edición anterior del boletín del WRM
“Resistencia y solidaridad frente al asalto de las corporaciones sobre los territorios”?

[Puedes acceder a todas las ediciones pasadas del boletín del WRM en este link](#)

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Editora: Joanna Cabello

Apoyo editorial: Diego Cardona, Lucía Guadagno, Edmundo Hoppe Oderich, Jutta Kill, Winfridus Overbeek y Teresa Pérez

Secretariado internacional del WRM

Av. Bolivia 1962 Bis, CP 11500 Montevideo, Uruguay

Teléfono y fax: 598 26056943

wrm@wrm.org.uy

<http://wrm.org.uy/es>